

**S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 14**  
**O R D I N A R I A**  
**MARTES 1º DE FEBRERO DE 2011**

En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con diez minutos del martes primero de febrero de dos mil once, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Juan N. Silva Meza, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.

El señor Ministro Presidente Juan N. Silva Meza abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

**I. APROBACIÓN DE ACTA**

Proyecto de acta de la sesión pública número trece, ordinaria, celebrada el lunes treinta y uno de enero de dos mil once.

Por unanimidad de diez votos el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

**II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS**

Sesión Pública Núm. 14

Martes 1 de febrero de 2011

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el martes primero de febrero de dos mil once:

**II. 1. 375/2009**

Amparo en revisión 375/2009 promovido por \*\*\*\*\*, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades, consistentes en la expedición y aplicación de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete, en sus artículos 1, 2, fracciones III, primer párrafo y V y 3. En el proyecto formulado por la señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas se propuso: *“PRIMERO. Queda firme el sobreseimiento decretado en el punto resolutivo primero que se rige por el cuarto considerando de la sentencia recurrida. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a \*\*\*\*\*, respecto de los actos reclamados y por las autoridades señaladas en el resultando primero de este fallo”*.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas precisó que presentaría conjuntamente los proyectos relativos a los amparos en revisión 375/2009, 275/2009, 282/2009, 1452/2009, 1607/2009 y 540/2009, elaborados por la Comisión de Secretarios de Estudio y Cuenta designada para tal efecto, y aprobados en términos del punto tercero del Acuerdo General 11/2010, del diecisiete

de agosto de dos mil diez; agradeciendo el esmero que pusieron en su elaboración.

Señaló que en dichos asuntos se reclaman, como actos de autoridad, diversos preceptos de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre del año dos mil siete y vigente a partir del primero de julio de dos mil ocho, a través de la que se creó el Impuesto Federal de Depósitos en Efectivo (IDE), remitidos a este Alto Tribunal en términos del Acuerdo General 12/2008, del primero de diciembre de dos mil ocho.

Indicó que de los seis amparos en revisión señalados, los primeros cinco se promovieron con motivo de la recaudación del impuesto a contribuyentes que tienen una cuenta en alguna Institución financiera; en tanto que el último, se instauró a partir de la adquisición en efectivo de cheques de caja.

En ese orden de ideas, manifestó que el paquete de asuntos comprende los dos supuestos de causación del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, lo que permitirá el análisis de diversos aspectos de fondo que en su conjunto abarcan los temas planteados en las diversas demandas de amparo y que subsisten en la revisión, como son el determinar si la ley reclamada cumple con los requisitos de fundamentación y motivación; si los depósitos en efectivo

representan una manifestación de riqueza susceptible de ser gravada; y, en su caso, si son indicativos de la capacidad contributiva; si se encuentran definidos en la ley otros elementos del tributo, como es el caso de la época de pago; y, si se encuentran justificados desde el punto de vista constitucional diversos tratos diferenciados.

Por ende, consideró que los asuntos que se presentan constituyen un importante referente para determinar si las disposiciones que regulan el nuevo impuesto a los depósitos en efectivo son acordes o no con diversos postulados de la Constitución Federal.

Además, precisó que pese a que todos ellos guardan semejanzas, en cada uno también se analizan particularidades propias derivadas de los argumentos planteados en los conceptos de violación, precisando que presentará el contenido de cada uno.

Manifestó que las consideraciones contenidas en los proyectos en los que se hace referencia al tema de mínimo vital para desvirtuar los razonamientos en los que se aduce violación al principio de proporcionalidad tributaria serán eliminadas de los engroses respectivos, al tratarse de un tema que se agregó a mayor abundamiento y que no modifica el sentido de la consulta, en tanto que no se infringe la garantía de proporcionalidad tributaria y al existir asuntos

que resolverá esta Suprema Corte, en los que sí se abordará el tema de mínimo vital de manera concreta y destacada.

El señor Ministro Presidente Silva Meza aceptó la propuesta la señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas relativa a la metodología para el análisis de los asuntos, uno a uno, por lo que encomendó al secretario general de acuerdos para que llamara la atención en cada asunto que ya fue discutido para efectos de determinar si es diferente o es igual e incluso, si ya fue discutido, para no discutir ni votar nuevamente lo que ya se votó.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió a la estimación del Tribunal Pleno los considerandos primero “Competencia”, segundo “Oportunidad”, tercero “Cuestiones que deben quedar firmes”, en cuanto sustenta la propuesta contenida en el punto Primero, consistente en que debe quedar firme el sobreseimiento decretado en el punto resolutivo primero que se rige por el cuarto considerando de la sentencia recurrida, en relación con los artículos 5 y 6 de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, toda vez que las consideraciones correspondientes del fallo no fueron impugnadas por la parte a la que perjudican; y cuarto “Agravios”.

Por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Aguilar Morales,

*Sesión Pública Núm. 14*

*Martes 1 de febrero de 2011*

Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Ortiz Mayagoitia y Presidente Silva Meza se aprobaron los indicados considerandos.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas expuso una síntesis del considerando quinto “Determinar si para la creación de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, el legislador debió justificar su proceder y, en su caso, si las razones aportadas en el proceso legislativo constituyen presunciones no desvirtuables. Legalidad y seguridad jurídica (fundamentación y motivación)” (páginas de la veintiocho a cincuenta y ocho), en cuanto se propone declarar infundados los argumentos contenidos en los agravios primero y tercero, y que en su esencia remiten al planteamiento originalmente expuesto en el apartado A) del cuarto concepto de violación, ya que al crear la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, el legislador no violó las garantías de legalidad y seguridad jurídica (fundamentación y motivación) contenidas en el artículo 16 de la Constitución Federal, pues actuó dentro del marco de atribuciones que la Constitución Federal le confiere en atención a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas en el contexto del procedimiento democrático previsto para esos efectos, sin que las consideraciones expuestas en este último deban ser objeto de escrutinio en esta instancia jurisdiccional por encontrarse dentro del marco amplio de configuración política de que

*Sesión Pública Núm. 14*

*Martes 1 de febrero de 2011*

goza el órgano legislativo para crear tributos y, en particular, para determinar su objeto gravado.

En relación con el considerando quinto del proyecto el señor Ministro Cossío Díaz solicitó que en la página cincuenta del proyecto se suprimiera una consideración relativa a los fines extrafiscales, pues la forma en que se introduce el elemento deriva de la forma en que se transcribe en el dictamen, estimando que no se trata de una consideración propia del proyecto, además de que en el caso concreto sí se tiene un fin extrafiscal.

El señor Ministro Franco González Salas se manifestó a favor del proyecto solicitando suprimir de las fojas cuarenta y ocho y cuarenta y nueve del proyecto la tesis que contiene el concepto de un margen amplio de configuración política, considerando que en materia tributaria esto implica ir más allá de lo que debe ser, por lo que estaría de acuerdo en que se haga referencia a la configuración política tributaria pero no de manera general, por lo que podría acotarse o suprimirse del proyecto, estimando que esto no afectaría la esencia del mismo.

Además, atendiendo a lo analizado por la Comisión que preside relativo al mínimo vital, propuso suprimir las referencias que a dicho concepto se realizan en el proyecto sometido a consideración.

*Sesión Pública Núm. 14*

*Martes 1 de febrero de 2011*

La señora Ministra Luna Ramos se manifestó a favor del proyecto específicamente respecto del considerando quinto que se somete a votación, señalando que la señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas manifestó que suprimirá lo relativo a un mínimo vital y aceptó la propuesta del señor Ministro Franco González Salas.

Agregó que el agravio consiste en que la Juez de Distrito del conocimiento no estudió el concepto de violación relativo a fundamentación y motivación legislativa, lo que se responde realizando la transcripción respectiva para demostrar ésta, porque sí se abordó el estudio correspondiente, aunado a que en las consideraciones subsecuentes se indica por qué no se violan los principios de fundamentación y motivación, recordando que en la tesis jurisprudencial respectiva se indica que por fundamentación y motivación legislativa se entiende que el Congreso tiene facultades para legislar y que existe una actividad que debe regularse, siendo posible suprimir los argumentos restantes relativos a políticas integrativas del Congreso aunado a que en la foja cincuenta y dos del proyecto se refiere la tesis relativa a que el legislador cuenta con un margen amplio de configuración al definir las tasas y tarifas, lo que estimó innecesario, siendo conveniente que se suprima.

El señor Ministro Cossío Díaz dio lectura a lo indicado en la foja cincuenta y cuatro del proyecto, considerando relevante lo afirmado en esos párrafos y estimando que lo



*Sesión Pública Núm. 14*

*Martes 1 de febrero de 2011*

señalado por el señor Ministro Franco González Salas implicaría, que más que suprimir la tesis referida podrían explicitar las mismas razones relativas al impuesto impugnado, proponiendo se insista en que solamente se refiere a la condición de política tributaria, tratándose de una tesis relevante de la Primera Sala.

El señor Ministro Franco González Salas precisó que su cuestionamiento es sobre la expresión “un margen amplio de configuración política” que produce confusión, estando de acuerdo con esa parte del proyecto, señalando que hablar de amplio margen de configuración política genera la problemática consistente en la confusión a que se refirió el señor Ministro Cossío Díaz, por lo que si se matiza esa expresión no tendría objeción sobre el concepto, manifestando su reserva relativa a no introducir argumentos que pudieran generar confusiones.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas estimó que acotando a la política tributaria el tema y desarrollando un poco más las expresiones solicitadas, de las páginas cincuenta y cuatro podría redactarse una tesis importante, sin menoscabo de aceptar lo señalado por la señora Ministra Luna Ramos en cuanto a ser escuetos en la respuesta que se da al agravio respectivo.

La señora Ministra Luna Ramos señaló que en relación con la expresión que manifiesta el señor Ministro Franco

*Sesión Pública Núm. 14*

*Martes 1 de febrero de 2011*

González Salas, el problema radica en que la tesis así lo señala, por lo que sería conveniente configurar otra tesis diferente en la que se planteara la situación acotada al caso de la política fiscal.

Ante ello, el señor Ministro Presidente Silva Meza precisó que se suprimirá la citada tesis para desarrollar el criterio necesario y así redactar otra diversa.

El señor Ministro Aguilar Morales manifestó compartir la propuesta de supresión de la tesis antes referida y solicitó eliminar del proyecto la relativa a la libertad para fijar tasas, lo que se aceptó por la señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas.

Sometida a votación la propuesta modificada del proyecto contenida en el considerando quinto del proyecto, se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Ortiz Mayagoitia y Presidente Silva Meza.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas expuso una síntesis del considerando sexto "Determinar si en la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo se prevé la época de pago del tributo. Legalidad tributaria" (páginas de la cincuenta y ocho a la sesenta y

ocho), en cuanto se propone calificar de infundados los argumentos de inconstitucionalidad (segundo agravio), porque el entero del impuesto a las autoridades fiscales dentro de un plazo que no debe exceder el límite legalmente establecido, entraña la realización de una conducta posterior y distinta a la sola recaudación del impuesto, que es atribuible única y exclusivamente a las instituciones del sistema financiero, y permite corroborar que la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo sí contiene en su artículo 4, fracción II, una norma específica en la que prevé la “época de pago” del tributo y, por virtud de la cual, debe quedar extinguida la obligación sustantiva de pago a cargo del contribuyente en la medida en que mantenga suficientes fondos en la cuenta respectiva, pero tal conducta no es atribuible a este último, sino a las instituciones del sistema financiero una vez que procedieron a la recaudación respectiva. Agregó que tal configuración no riñe con el principio de legalidad tributaria, el cual sólo exige que se contengan en una ley (formal y material) los elementos esenciales del impuesto, como en el caso ocurre, sin que la configuración normativa respectiva cause inseguridad jurídica en los contribuyentes ni deje margen de actuación arbitraria o caprichosa para las autoridades fiscales.

La señora Ministra Luna Ramos agregó se impugnó mediante la garantía de libertad tributaria, que no se determinó correctamente la fecha de pago del impuesto, lo que se respondió en el sentido de que sí está determinada la

*Sesión Pública Núm. 14*

*Martes 1 de febrero de 2011*

fecha de pago ya que el artículo 3º de la ley impugnada señala que a final de mes se elabora un estado de cuenta y se determina si hubo depósitos en efectivo respecto de los que se debe pagar el respectivo impuesto.

Consideró que el problema radica en que se hace valer de una forma integral, como un sistema, al sostener que el impuesto en sí no define adecuadamente la época del pago, lo que el proyecto responde en el sentido de que este agravio lo sobreseyó la Juez de Distrito con fundamento en los artículos 5º y 6º de la legislación impugnada.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas precisó que la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo no causa perjuicio alguno a la quejosa en el aspecto medular que se refiere, estableciendo en la ley la época de pago, agregando que en el mencionado ordenamiento se distinguen dos obligaciones a cargo de las instituciones del sistema financiero: la de recaudar el impuesto el último día del mes de que se trate conforme a lo previsto en el artículo 4º, fracción I, de la ley impugnada; y la de enterar el impuesto en el plazo y términos que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante reglas de carácter general, sin que pueda exceder dicho plazo de tres días hábiles al en que se hubiese recaudado el impuesto, como se desprende del artículo 4º, fracción II, del referido ordenamiento.

En relación con la segunda obligación precisó que ésta no implica un deber o conducta a cargo de los contribuyentes, quienes para cumplir con su obligación sustantiva deben mantener fondos suficientes en la cuenta o cuentas que tengan aperturadas, sino que se establece para las instituciones del sistema financiero, en su carácter de auxiliares de la administración pública; de manera que se trata de una obligación derivada de una relación administrativa entre éstas y las autoridades hacendarias, que aún siendo consustanciada, es diferenciable de ésta. Agregó que el entero del impuesto se remite a las autoridades fiscales dentro de un plazo que no debe exceder al legalmente establecido y entraña la realización de una conducta posterior y distinta a la sola recaudación que es atribuible única y exclusivamente a las instituciones del sistema financiero y permite corroborar que la ley reclamada sí contiene en la fracción II del artículo 4º una norma específica en la que prevé la época de pago del tributo, por virtud de la cual debe quedar extinguida la obligación sustantiva de pago a cargo del contribuyente en la medida en que mantenga suficientes fondos en la cuenta respectiva, pero tal conducta no es atribuible a éste último sino a las instituciones del sistema financiero, una vez que procedieron a la recaudación respectiva en torno a la responsabilidad solidaria en la que la recurrente pretende fundar el perjuicio que le causaría, atendiendo lo previsto en los artículos 4º, fracción I, último párrafo, de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, así como el diverso 26, fracción I, del

Código Fiscal de la Federación, los que prevén que las instituciones del sistema financiero, en tanto están obligadas a recaudar el impuesto, son responsables solidarias con los contribuyentes en los casos que menciona, sin que implique que dicha regla opere a la inversa.

Agregó que el artículo 4º, fracción II, de la ley impugnada, al establecer que el entero del impuesto debe realizarse en el plazo y en los términos que mediante reglas generales establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin que exceda de los tres días hábiles siguientes a aquel en el que se haya recaudado el impuesto, no genera inseguridad jurídica a la quejosa ni permite una actuación arbitraria por parte de la autoridad, porque debe tomarse en cuenta que tal situación ni siquiera se relaciona con la quejosa como contribuyente, sino con las instituciones del sistema financiero, de manera que no le puede ocasionar incertidumbre jurídica a partir de una situación en la que no interviene y porque el propio legislador estableció el límite temporal al que deberá ajustarse la autoridad hacendaria para que ésta precise el plazo específico que tendrán las instituciones del sistema financiero para proceder al entero respectivo, sin que, en caso alguno, pueda excederlo, lo que en última instancia tampoco vincula a la quejosa y, por ende, no le causa perjuicio; por lo que manifestó que el segundo agravio debía declararse infundado.

La señora Ministra Luna Ramos señaló que efectivamente, a final de mes, el banco realiza un corte de caja y determina qué es objeto del impuesto y cuando no existe depositada la cantidad necesaria a retener aquel debe informarlo a la autoridad hacendaria, la cual da diez días al quejoso para que manifieste lo que a su derecho convenga, considerando que se trata de una incongruencia de la sentencia, ya que en la foja dos del proyecto se advierte que los artículos 5º y 6º no fueron reclamados de manera destacada, pues se controvirtió el sistema en su totalidad con relación a la fecha de pago, sin que exista problema respecto de dicha fecha cuando el banco lleva a cabo el corte de caja y retiene el impuesto correspondiente, pues esto se encuentra claramente determinado; considerando que el problema se da en el artículo 5º, sobreseído sin haberse reclamado como acto destacado, el cual señala: “Si de la información a que se refiere la fracción VI del artículo 4º de esta ley se comprueba que existe un saldo a pagar de impuesto a los depósitos en efectivo por parte del contribuyente, la autoridad determinará el crédito fiscal correspondiente, lo notificará al contribuyente y le otorgará el plazo de diez días hábiles para que manifieste lo que a su derecho convenga. Trascurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad procederá al requerimiento de pago y posterior cobro del crédito fiscal”, respecto de lo que la quejosa argumenta que no se precisó adecuadamente la fecha de pago.

*Sesión Pública Núm. 14*

*Martes 1 de febrero de 2011*

Estimó que si se lee con detenimiento dicho precepto se advierte que al no haber saldo, se notifica a la autoridad hacendaria, la cual dará un plazo de diez días para manifestar lo que a derecho convenga y vencido ese plazo no se establece la posibilidad de que se emita una resolución en la que se señale si se justificó o no, sino que la autoridad procederá al requerimiento y pago posterior siendo conveniente agregar que “en su caso”, opera en el supuesto de que no hubiera justificado la situación advertida pero si el contribuyente la justificó, como se le requerirá del plazo, de lo contrario se entendería que el plazo de diez días que se da fuera inocuo, lo que pudiera interpretarse y no contestarle señalando que respecto de los artículos ya se sobreseyó porque no fueron reclamados de manera destacada, pues el argumento se hace valer como un sistema, lo que está contestado en el proyecto, faltando únicamente lo anterior para salvar el problema y precisar cómo se debe interpretar el precepto en comento, sin necesidad de que se señale una fecha, sino que simplemente precise que pasados los diez días, en su caso, si no hay justificación, se procederá al requerimiento y al pago.

El señor Ministro Aguilar Morales compartió lo expresado por la señora Ministra Luna Ramos, estimando que, además, debe tomarse en cuenta que el establecimiento de la época de pago es una garantía constitucional a favor del contribuyente, estimando cuestionable que el establecimiento de la época de pago



podría no afectar a la quejosa, lo que llevaría a una conclusión diversa. Estimó que en el proyecto no existe clara distinción entre recaudación y entero del tributo, lo que aparentemente se confunde al señalar que: “la ley sí prevé la época de pago para disponer el momento en que las instituciones del sistema financiero deberán enterar el tributo a las autoridades hacendarias”, proponiendo dilucidar el problema respondiendo cuándo dispone la ley que el contribuyente debe pagar el tributo.

Al respecto, el artículo 2º, fracción III, de la ley impugnada proporciona la base relativa a que los contribuyentes se encuentran obligados al pago por los depósitos en efectivo que se realicen en sus cuentas por más de veinticinco mil pesos cada mes del ejercicio fiscal, salvo por las adquisiciones en efectivo de cheques de caja, considerando todos los depósitos en efectivo que se realicen en todas las cuentas en las que el contribuyente sea titular en una misma institución. En el caso de los cheques de caja es en el momento en que se realiza la adquisición del cheque, con lo que se tiene el momento en que se hace el pago, en tanto que por lo que se refiere a la época de recaudación, debe atenderse a lo previsto en el artículo 4º de la ley impugnada, el cual señala: “De acuerdo con el tipo de depósito se realizará la recaudación si se trata de depósitos en efectivo a cuyo monto individual exceda de veinticinco mil pesos o de cheques de caja, se realizará en el momento de su adquisición; en los depósitos de cuenta se

*Sesión Pública Núm. 14*

*Martes 1 de febrero de 2011*

recaudará el último día del mes de que se trate en cualquiera de las cuentas del contribuyente; en el supuesto de que no existan fondos, entonces se realizará la retención en el siguiente depósito realizado durante el año”, con lo que se prevé la obligación de la institución como responsable solidaria de entregar una constancia mensual y anual al contribuyente para que la autoridad proceda a su cobro en términos de lo previsto en el artículo 5º de la ley impugnada. De ahí que los contribuyentes deben considerar el impuesto por los depósitos que ingresen a sus cuentas pues de no tener fondos cuando corresponda la recaudación respectiva, se generarán recargos y actualizaciones en términos del artículo 6º del referido ordenamiento.

Además, la ley cuestionada también establece la época del entero, al señalar en su artículo 4º: “Las instituciones del sistema financiero tendrán las siguientes obligaciones: I. Enterar el impuesto a los depósitos en efectivo en el plazo y en los términos que mediante reglas de carácter general establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dicho plazo no deberá exceder de los tres días siguientes a aquel en que haya recaudado el impuesto”.

Estimó que la circunstancia de que en la ley no se señalen los pormenores sobre el entero, no contraviene la garantía de legalidad tributaria, pues la ley sí dispone que el plazo no deberá exceder de tres días hábiles siguientes a la recaudación, por lo que estimó que sí debe contestarse pero

no en el sentido de que no le afecta a la quejosa, sino de que sí está prevista en la legislación la forma de pago, incluida la de recaudación y del entero respectivo, por lo que si se ampliara la explicación en comentario, suprimiendo la no afectación a la quejosa, estaría de acuerdo con el sentido del proyecto en esta parte.

El señor Ministro Cossío Díaz señaló tener dudas sobre el tema de época de pago, incluso problemas de constitucionalidad; sin embargo, existe un tema previo sobre el que deben pronunciarse y que se sostiene como síntesis de los conceptos de violación en el sentido que se demostró ante la Juez de Distrito el supuesto consistente en que al final del mes no existieran fondos suficientes y luego en la página cincuenta y siete se contesta: “En primer término, debe precisarse que carece de sustento el argumento en el cual se sostiene que la ausencia de la época del pago fue demostrada ante la Juez a quo al evidenciarle que en el supuesto de que al final del mes no existan fondos suficientes...”

Además, en la página cincuenta y ocho se señala que “La Juez Federal no omitió el análisis de tal cuestión porque le hubiese pasado inadvertida, sino que su proceder se debió a que antes de entrar a las cuestiones de fondo que se le plantearon determinó sobreseer en relación con los artículos 5º y 6º de la Ley del Impuesto Sobre los Depósitos en Efectivo y que se arribó a esa conclusión al estimar que

respecto de tales preceptos se actualizaron las causales de improcedencia previstas en el artículo 73, fracciones V, VI, y XVIII, ésta en relación con el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo, porque en el entendido de que dichos preceptos son normas de naturaleza heteroaplicativa la quejosa no acreditó su interés jurídico para combatirlos, ya que de las pruebas ofrecidas no advirtió alguna que mostrara que la autoridad fiscal hubiese determinado el crédito respectivo como consecuencia de que no se hubiera podido recaudar el impuesto a los depósitos en efectivo por falta de fondos y el requerimiento de pago que se formula como resultado de ello, incluso la Juez Federal manifestó que se encontraba impedida para pronunciarse sobre las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas en relación con los citados artículos 5º y 6º de la ley reclamada”.

Posteriormente, señala: “Así se advierte que la omisión en el estudio de los preceptos aludidos se debió a que la Juez Federal decidió sobreseer en relación con los preceptos señalados sin que esa determinación hubiera sido combatida por la quejosa, hoy recurrente, por lo que incluso ya se declaró firme en el considerando tercero de esta ejecutoria, por falta de impugnación”, lo que consideró fundamental.

En ese tenor señaló que en el caso concreto encuentra problemas respecto de dichos artículos y respecto del tema de constitucionalidad, como les sucede a los señores

*Sesión Pública Núm. 14*

*Martes 1 de febrero de 2011*

Ministros Aguilar Morales y Luna Ramos, sin encontrar claramente determinado por las condiciones procesales de la revisión, por lo que salvo que se encontrara una razón para levantar los sobreseimientos, preferiría no pronunciarse sobre el tema en comento.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas señaló que los proyectos están realizados conforme a la técnica de amparo ya que no hubiera sido posible responder un tema del artículo 5º del ordenamiento impugnado si la Juez lo había sobreseído por una parte y, por la otra, el quejoso no había combatido ese sobreseimiento.

En cuanto a que los artículos son parte del sistema y la Juez del Distrito sobreseyó incorrectamente y el quejoso no impugnó ese sobreseimiento, estimó que el señor Ministro Aguilar Morales está dando la respuesta sobre la regulación del sistema que rige la época de pago, la que retomaría para considerar constitucional el sistema.

El señor Ministro Aguilar Morales precisó que en la página cincuenta y nueve se da contestación a lo que la Juez aparentemente no estudió; sin embargo, al final de la misma página, se señala: “Al margen de lo resuelto por la Juez de Distrito, en el caso se advierte” y se realiza el estudio con el que no está totalmente de acuerdo, por lo que propuso que se eliminara esa parte porque de permanecer,

*Sesión Pública Núm. 14*

*Martes 1 de febrero de 2011*

debían precisarse los términos y las instituciones que están previstas en el sistema, manifestando que estará de acuerdo con cualquiera de las dos propuestas.

La señora Ministra Luna Ramos precisó que efectivamente se sostiene que no se estudia porque se sobreseyó respecto de los artículos 5º y 6º del ordenamiento impugnado, los que no fueron reclamados en la demanda.

En cuanto al concepto de violación estimó que se impugna como sistema y allí es donde se dice que en toda la ley no se regula la época de pago, combatiéndose todos los supuestos, por lo que se sostiene que hay una incongruencia de la sentencia y se entra al estudio respectivo, o bien, si la mayoría estima que al haberse sobreseído y no existir agravio, no debe abordarse su estudio y deberá suprimirse el que se realiza en el proyecto, lo que estimó ajeno a la técnica del amparo.

El señor Ministro Cossío Díaz consideró que debe sobreseerse dado que la Juez de Distrito desagregó dos numerales para sobreseer, lo que no fue controvertido en los agravios.

El señor Ministro Ortiz Mayagoitia consideró que habiendo diversos amparos relacionados con el mismo tema, la finalidad del proyecto era la de abordarlo de una vez para que la decisión sirviera respecto de los demás asuntos; sin

*Sesión Pública Núm. 14*

*Martes 1 de febrero de 2011*

embargo, aprobó la idea de que el agravio debía centrarse en que la Juez desagregó los preceptos y sobreseyó respecto de los mismos, manifestando su conformidad con que se suprima de la página cincuenta y nueve la parte relativa a: “por otra parte...”

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas solicitó que se someta a consideración del Tribunal Pleno si se debe o no suprimir dicha parte del proyecto, manifestando que le parecía correcta la propuesta del señor Ministro Aguilar Morales.

El señor Ministro Franco González Salas se manifestó en el sentido de suprimir el estudio de constitucionalidad dado que será mejor manifestarse por la falta de impugnación del sobreseimiento, a lo que se sumó el señor Ministro Aguilar Morales, ante lo cual la señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas aceptó ajustar su propuesta en esos términos.

Sometida a votación la propuesta modificada del proyecto contenida en el considerando sexto del proyecto, en las fojas de la cincuenta y cinco a la cincuenta y nueve, se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Ortiz Mayagoitia y Presidente Silva Meza.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas expuso una síntesis del considerando séptimo “Determinar si los depósitos en efectivo constituyen una manifestación de riqueza susceptible de ser gravada y/o si son indicativos de capacidad contributiva. Proporcionalidad tributaria” (páginas de la sesenta y nueve a la ciento dos), precisando que se trata de un tema de proporcionalidad tributaria en el que se analiza el cuarto agravio, respecto de lo cual en el proyecto se señala que con independencia de que la Juez de Distrito hubiese elaborado consideraciones a través de las cuales asumiera que la quejosa articuló su argumento a partir de que el impuesto a los depósitos en efectivo grava ingresos, tal como se expone en el Apartado A del cuarto agravio, el estudio se avoca directamente al análisis de la cuestión efectivamente planteada que se desprende del Apartado B del mismo agravio.

Para tal fin, se elaboró un análisis definiendo la naturaleza de impuesto a los depósitos en efectivo a la luz de las razones que inspiraron su creación y atendiendo al hecho imponible como elemento nuclear de la contribución, a partir del cual se diseña toda la normativa de la ley en estudio, sosteniendo que el fenómeno económico que se traduce en la potencialidad para revelar la capacidad contributiva, son: Los depósitos en efectivo, la adquisición de los cheques de caja utilizando efectivo y el hecho imponible



es la realización de tales actos, sin comprender depósitos efectuados mediante transferencias electrónicas, traspasos de cuentas, títulos de crédito, o cualquier otro documento o sistema pactado con las instituciones del sistema financiero, en los términos de las leyes aplicables.

En ese tenor, se sostiene que la base del impuesto se establece de manera congruente con la elección del fenómeno económico gravado, de modo que el elemento cuantitativo refleja la magnitud con la que se realiza el hecho imponible. Por ende, la revelación de riqueza ocurre al realizarse el depósito o adquisición de cheques de caja en efectivo, debiendo destacarse que el importe o monto total respectivo, es el que denota la cuantía de tal riqueza.

Asimismo, precisó que si el legislador estableció el hecho imponible eligiendo como fenómeno económico revelador de riqueza a los depósitos en efectivo y la razón por la que discriminó de la causación a los depósitos que se realizaron a través de los medios previstos en el artículo 1º, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, pretendió garantizar la recaudación del impuesto sobre la renta, por cuanto hace a las cantidades depositadas, respecto de las cuales se desconoce su procedencia.

En ese orden de ideas, sería lógico concluir que las disposiciones que regulan el mecanismo de recuperación del

impuesto contenidas en los artículos 7, 8, 9 y 10 de la ley impugnada no son accesorias del tributo sino fundamentales y propias de su naturaleza, pues sólo en la medida en que éstas garanticen el cumplimiento de su propósito, tiene sentido la delimitación negativa del hecho imponible, por lo que el impuesto a los depósitos en efectivo, recae directamente sobre las personas que realizan el hecho imponible; grava una manifestación aislada de riqueza, pues no toma en consideración la totalidad del patrimonio del contribuyente; y, constituye un impuesto de control, principalmente del cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia del impuesto sobre la renta.

Agregó que también se expone cómo el impuesto a los depósitos en efectivo respeta el principio de proporcionalidad tributaria; para lo que se sostiene que de conformidad con lo previsto en los artículos 1º, 2º y 12, fracción II, de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, que regulan el hecho imponible en la base gravable del impuesto, éste recae sobre una manifestación aislada de riqueza, consistente en la disponibilidad del dinero que se tiene, ya sea en las cuentas aperturadas en las instituciones del sistema financiero o por la adquisición en efectivo de cheques de caja, lo que revela la tenencia de un poder adquisitivo presente, que se ahorra para el futuro, distrayéndolo del gasto y consumo actual que se requiere para hacer frente a las necesidades presentes, siendo suficiente para que se salvaguarden las exigencias del principio de

proporcionalidad tributaria; toda vez que se expone que en la contribución analizada existe una triple protección a la capacidad contributiva de los causantes, es decir, otros aspectos aunados al señalado anteriormente, a saber: 1. El impuesto a los depósitos en efectivo se diseña para que aquéllos que cumplan con las obligaciones en materia del impuesto sobre la renta, no resientan el impacto de la recaudación de aquél mediante un mecanismo de recuperación, de manera que el impuesto impugnado no constituye una privación patrimonial definitiva, salvo en los casos en los que existe incumplimiento en las obligaciones en el impuesto sobre la renta; 2. La estructura del impuesto impugnado protege la riqueza gravada para que no impacte de manera excesiva a las personas físicas, tomando en consideración que se trata de un impuesto que gravita sobre una manifestación aislada de riqueza, consistente en sus ahorros, sin determinar la capacidad contributiva total de la persona, que garantiza que una cantidad suficiente para hacer frente a las necesidades más básicas de la persona y quede libre de imposición; es decir, que se prevé una exención mensual general de veinticinco mil pesos, conforme al artículo 2º, fracción III, de la ley reclamada; y, 3. Con base en las consideraciones anteriores, el impuesto a los depósitos en efectivo, no viola el principio de proporcionalidad tributaria, pues dicha contribución recae sobre manifestaciones de riqueza susceptibles de revelar capacidad para contribuir al gasto público.

*Sesión Pública Núm. 14*

*Martes 1 de febrero de 2011*

Finalmente concluyó señalando que las afirmaciones sustentadas por la recurrente en el sentido de que dicho tributo viola el citado principio por no tomar en consideración la fuente del depósito, así como las condiciones en que se realiza, devienen en infundadas pues, por una parte, se trata de un impuesto que gravita sobre una manifestación aislada de riqueza y, por otra parte, resultaría un contrasentido que el impuesto pretenda gravar las cantidades depositadas respecto de las cuales se desconoce su procedencia, y que para respetar el principio de proporcionalidad tributaria, se exigiera precisamente tomar en consideración aspectos relacionados con la procedencia de los recursos depositados, máxime cuando el objeto económico gravado por el legislador constituye una riqueza estática, consistente en las cantidades ahorradas.

El señor Ministro Aguilar Morales se manifestó de acuerdo con el considerando anterior estimando necesario realizar dos observaciones, la primera, ya señalada por la señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas, en cuanto a suprimir lo relativo al mínimo vital y la segunda consistente en suprimir lo indicado en la foja noventa y dos por lo que se refiere a que los depósitos respectivos tiene como finalidad el ahorro, ya que puede guardar relación con circunstancias diversas como el caso de hacer pagos inmediatos.

Además, en cuanto a la naturaleza de un impuesto, precisó que si bien es cierto que se trata de un impuesto complementario del impuesto sobre la renta, pese a que si no se puede cobrar el impuesto sobre la renta se podría cobrar el impuesto sobre depósitos en efectivo contra cualquier otro impuesto federal que se señala, si se adicionara un mecanismo de compensación, se podría aclarar para que no pareciera que únicamente será contra el impuesto sobre la renta, lo que se aceptó por la señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas.

El señor Ministro Ortiz Mayagoitia precisó que en alguna parte del proyecto se indica: “la capacidad contributiva que se revela a través de estos depósitos y el gravamen correspondiente no tiene como finalidad soportar el gasto público sino solamente en la medida en que exista incumplimiento de las obligaciones al impuesto sobre la renta”, señalando estar en desacuerdo con esa expresión, pues si un impuesto no está destinado al gasto público sería inconstitucional, aceptando la señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas suprimir lo anterior.

La señora Ministra Luna Ramos indicó que coincidía con el estudio de esta parte del proyecto, así como con lo señalado por los señores Ministros Ortiz Mayagoitia y Aguilar Morales, respecto a que el señalamiento de la página noventa y dos no es materia de constitucionalidad, sino que simplemente los depósitos son los que están siendo

*Sesión Pública Núm. 14*

*Martes 1 de febrero de 2011*

gravados al realizarse en efectivo, manifestando que la supresión de la página noventa y dos a la página noventa y cinco, segundo párrafo, precisaría tal situación.

El señor Ministro Cossío Díaz señaló que además de lo señalado por los señores Ministros, en las fojas ochenta y seis y ochenta y siete del proyecto se indica “Asimismo, de dichos preceptos se desprende la concreción normativa de otros dos propósitos perseguidos por el legislador al diseñar el ordenamiento legal, a saber únicamente impacta en las personas que omiten declarar ingresos para efectos del impuesto sobre la renta, y respecto de dichos ingresos y sirve como un mecanismo que impulse al cumplimiento de las obligaciones fiscales respecto del impuesto sobre la renta, pues en la medida en que se cumplan dichas obligaciones se tendrá un monto suficiente para poder eliminar la carga financiera que represente el impuesto a los depósitos en efectivo”.

Al respecto estimó necesario matizar lo anterior ya que se sostiene que no tendrá impacto sino en las personas que no declaren.

Otra observación se refiere a lo afirmado en relación con el objeto económico gravado por el legislador en el sentido de que constituye una riqueza estática consistente en las cantidades ahorradas, lo que es conveniente suprimir.

*Sesión Pública Núm. 14*

*Martes 1 de febrero de 2011*

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas aceptó realizar las modificaciones solicitadas.

Sometida a votación la propuesta modificada del proyecto contenida en el considerando séptimo del proyecto, se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Ortiz Mayagoitia y Presidente Silva Meza.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas expuso una síntesis del considerando octavo “Determinar si existe un trato diferenciado injustificado entre contribuyentes del impuesto a los depósitos en efectivo, en función del monto exento de \$25,000.00. Artículo 2, fracción III, de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo. Equidad tributaria” (páginas de la ciento dos a la ciento doce), en cuanto se estima que son infundados los argumentos de inconstitucionalidad contenidos en el quinto agravio, porque la determinación del monto exento de \$25,000.00, se hizo considerando que, de acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el ingreso promedio mensual per cápita en el año dos mil cuatro fue de \$22,998.80 y conforme a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, el saldo promedio de las cuentas de depósitos a

la vista o de exigibilidad inmediata es de \$23,569.00. En el proceso legislativo se justificó de manera razonable la exención, la cual tiene plena validez, en tanto a través de ella se busca que el gravamen: a) no afecte los ingresos para la satisfacción de las necesidades básicas familiares; y b) no desincentive el desarrollo del sistema financiero.

Así, el monto exento de \$25,000.00 resulta ser un medio idóneo para conseguir los propósitos que el legislador se planteó alcanzar, en tanto que constituye una medida producto de un equilibrio entre el ingreso promedio mensual per cápita (en dos mil cuatro) y el saldo promedio en cuentas de depósito a la vista o de exigibilidad inmediata, sin ser de manera necesaria el resultado de operaciones o procedimientos exactos, sino sólo un reflejo aceptable de la situación imperante al momento de instrumentarse dicha medida, sin que tampoco hubiese sido necesario acudir a cifras específicas de una determinada anualidad o que el legislador se hubiese allegado más información de la que tuvo a la mano al momento de definirlo.

El señor Ministro Valls Hernández manifestó compartir el sentido del proyecto pero no las consideraciones que lo sustentan ya que el análisis que desarrolla parte de la distinción entre dos tipos de operaciones que pueden ser una opción válida para todos los contribuyentes en tanto que el mismo sujeto puede efectuar un depósito por un monto igual o inferior a veinticinco mil pesos, o bien realizar uno



mayor a dicha cantidad, estimando que el estudio presentado no es acorde con el criterio base para determinar si una ley es inequitativa, toda vez que dicho criterio consiste en tratar de igual manera a los iguales y desigual a los desiguales; de manera que su ámbito de operación se encuentra vinculado a un trato de personas y a un grupo de éstas; no a operaciones, lo que se corrobora al observar que el fundamento ontológico del estudio de la garantía de equidad radica en la igualdad de las personas ante la ley, tal como se desprende del criterio de rubro: “EQUIDAD TRIBUTARIA. CUANDO SE RECLAMA LA EXISTENCIA DE UN TRATO DIFERENCIADO RESPECTO DE DISPOSICIONES LEGALES QUE NO CORRESPONDEN AL ÁMBITO ESPECÍFICO DE APLICACIÓN DE AQUEL PRINCIPIO, LOS ARGUMENTOS RELATIVOS DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LA GARANTÍA DE IGUALDAD”, indicando que conforme a dicho criterio, al encontrarse ante el análisis de dos tipos diferentes de operaciones aisladas, estimó que no podría realizarse conforme a la garantía de equidad, manifestándose de acuerdo con considerar infundado el agravio respectivo.

El señor Ministro Aguilar Morales compartió lo indicado por el señor Ministro Valls Hernández y estimó conveniente agregar la tesis de rubro “IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL”.

*Sesión Pública Núm. 14*

*Martes 1 de febrero de 2011*

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas agradeció las propuestas de los señores Ministros Valls Hernández y Aguilar Morales, así como las demás intervenciones que llevarán a la construcción de una teoría en materia tributaria, al ser la primera vez que este Tribunal Pleno analiza el impuesto que se impugna.

La señora Ministra Luna Ramos precisó que en materia de equidad se trata de un problema de personas, lo que se traduce en el sentido de sostener que no se está ante la posibilidad de hacer una diferenciación pues los parámetros serán las cantidades y los depositantes, indicando que valdría la pena mencionar que no hay diferencia de sujeto, ante lo cual el señor Ministro Presidente Silva Meza propuso elaborar un comparativo porque no es equidad en función del depósito que es igual para todos.

El señor Ministro Aguilar Morales consultó si no habrían argumentaciones en relación con un fin extrafiscal porque no guardaría relación con el tema, respecto de lo cual la señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas precisó que se aceptó la supresión de dichas consideraciones.

El señor Ministro Cossío Díaz cuestionó los términos en los que quedaría el proyecto, ante lo cual la señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas precisó que en los términos solicitados por el señor Ministro Valls

*Sesión Pública Núm. 14*

*Martes 1 de febrero de 2011*

Hernández; sin embargo, el referido señor Ministro Cossío Díaz manifestó que preferiría quedarse con las consideraciones del proyecto original para que no se generen distorsiones.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas propuso someter a votación las consideraciones que prevalecerán.

La señora Ministra Luna Ramos precisó que después de la intervención del señor Ministro Valls Hernández, se puede concluir que en materia de equidad, todas las tesis que se presentaron son en el sentido de determinar que la diferenciación se hace entre sujetos, por lo que estimó que no hay diferencia de sujetos pues éstos son depositantes; en tanto que la diferencia radica en la cantidad que se deposite.

El señor Ministro Franco González Salas consideró correcto el enfoque del proyecto en el sentido de que sostiene que no se violan los principios tributarios porque el legislador estableció un parámetro adecuado para cumplir con los fines que persigue y no un medio que se vincula con lo señalado por el señor Ministro Cossío Díaz respecto a cuál es el enfoque de la política tributaria, por lo cual estimó adecuados los términos originales del proyecto.

El señor Ministro Aguilar Morales señaló compartir lo expresado por el señor Ministro Franco González Salas en el

*Sesión Pública Núm. 14*

*Martes 1 de febrero de 2011*

sentido de que se trata de aquéllos sujetos que depositan ciertas cantidades y no únicamente de las cantidades en concreto, lo que implica una circunstancia relativa a los sujetos por el principio de igualdad.

El señor Ministro Valls Hernández indicó que valdría la pena precisar que se trata de sujetos con relación a cantidades, ante lo cual el señor Ministro Presidente Silva Meza precisó que no sustituye el argumento.

El señor Ministro Aguirre Anguiano consideró que no lo sustituye, recordando que se refiere a los sujetos que son los depositantes y que la significación del depósito de \$25,000.00 al mes en efectivo mediante uno o varios depósitos varía para los sujetos dependiendo de lo que esta cantidad implique para cada uno, por lo que se actualiza el principio de proporcionalidad. Por tanto se manifestó a favor del proyecto.

Sometida a votación la propuesta del proyecto contenida en su considerando octavo se aprobó por mayoría de siete votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Sánchez Cordero de García Villegas, Ortiz Mayagoitia y Presidente Silva Meza. Los señores Ministros Zaldívar Lelo de Larrea, Aguilar Morales y Valls Hernandez votaron con el sentido del proyecto pero con las consideraciones propuestas por el señor Ministro Valls Hernández matizadas por el señor

*Sesión Pública Núm. 14*

*Martes 1 de febrero de 2011*

Ministro Aguilar Morales y reservaron su derecho para formular voto concurrente.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió a votación la propuesta del proyecto contenida en los puntos resolutivos que proponen: “PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida; SEGUNDO. Queda firme el sobreseimiento decretado en el punto resolutivo primero que se rige por el cuarto considerando de la sentencia recurrida, en términos del considerando tercero de este fallo; y, TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a \*\*\*\*\* , respecto de los actos reclamados y por las autoridades señaladas en el resultando primero de este fallo”, la que, en votación económica, se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Ortiz Mayagoitia y Presidente Silva Meza.

El señor Ministro Presidente Silva Meza declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el siguiente asunto:

**II. 2. 278/2009**

Amparo en revisión 278/2009 promovido por \*\*\*\*\* , contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades,

Sesión Pública Núm. 14

Martes 1 de febrero de 2011

consistentes en la expedición y aplicación de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, publicada en el diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete, en sus artículos 1, primer y segundo párrafos, 2, fracciones II y III, 3, primer y segundo párrafos, 7, primer párrafo y 8, cuarto párrafo. En el proyecto formulado por la señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas se propuso: *“PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de garantías promovido por \*\*\*\*\*; en términos de la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a \*\*\*\*\*; en términos de la sentencia recurrida”*.

Asimismo, informó que de los temas que se abordan en el proyecto, únicamente el contenido en el considerando séptimo, relativo a la proporcionalidad del tributo se analizó en el amparo en revisión resuelto anteriormente.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió a la estimación del Tribunal Pleno los considerandos primero “Competencia”, segundo “Oportunidad”, tercero “Cuestiones que deben quedar firmes”, en cuanto se determina que debe quedar firme el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, en relación con los actos reclamados al Secretario de Hacienda y Crédito Público y a la Administradora Local de Recaudación del Sur del Distrito Federal, por no haber sido impugnados en la revisión; y cuarto “Agravios”.

El señor Ministro Cossío Díaz precisó que en el considerando tercero debían quedar firmes algunos planteamientos de la Juez de Distrito que no fueron combatidos, indicando que remitiría una nota a la señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas en la que se detallan para efectos de la sentencia y del punto resolutivo respectivo.

Por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Ortiz Mayagoitia y Presidente Silva Meza se aprobaron los indicados considerandos.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas expuso una síntesis del considerando quinto “Interés jurídico para reclamar los artículos 2º, fracción III y 3º, párrafo segundo, de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, y la Regla I.11.11 de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil ocho” (páginas cuarenta y siete a la cincuenta y tres) en cuanto se determina que son infundados los agravios de la parte recurrente. El presente juicio fue sobreseído en primera instancia por falta de interés jurídico respecto de los artículos 2º, fracción III y 3º, párrafo segundo de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, así como respecto de la Regla I.11.11 de la Resolución Miscelánea

Fiscal para dos mil ocho, por considerarse que están dirigidos específicamente a quienes adquieren en efectivo cheques de caja, así como a los cotitulares de cuentas en instituciones del sistema financiero, de manera que para poder reclamarlos, el quejoso debió probar estar en tales supuestos, esto es, que adquirió un cheque de caja sobre cuyo monto se retuvo el impuesto o ser cotitular de una cuenta abierta en una institución del sistema financiero, lo que no quedó demostrado en autos.

El recurrente combate dicho sobreseimiento porque estima que los artículos en cuestión inciden en un elemento esencial del tributo como es el sujeto, por lo que si bien regulan circunstancias particulares en las que no se ubica, forman parte de un sistema normativo que le fue aplicado con motivo de la recaudación que se hizo del impuesto a los depósitos en efectivo en una cuenta a su nombre.

No está controvertida la naturaleza heteroaplicativa de los preceptos por los que se sobreseyó en el juicio: la quejosa acudió al amparo con motivo del primer acto de aplicación de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, consistente en la recaudación que de dicho tributo realizó una institución del sistema financiero. Tampoco está a debate si la quejosa demostró haber adquirido en efectivo un cheque de caja o ser cotitular de una cuenta, pues en sus agravios reconoce no encontrarse en ninguno de esos supuestos.



Lo que la parte recurrente plantea es que el primer acto de aplicación de la ley la faculta para impugnar todos los elementos esenciales del tributo, por lo que si los preceptos objeto del sobreseimiento inciden en el sujeto del impuesto, debe entenderse que forman parte del sistema normativo para cuya impugnación está legitimada.

La señora Ministra Luna Ramos se manifestó de acuerdo con la propuesta precisando que no se trata del artículo 2º en su totalidad, sino únicamente de su fracción III que se refiere a los cheques de caja; en tanto que del artículo 3º, únicamente debe abordarse lo relativo al primer párrafo, lo que fue aceptado por la señora Ministra Sánchez Cordero de García Villegas.

Sometida a votación la propuesta modificada del proyecto contenida en el considerando quinto, se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Ortiz Mayagoitia y Presidente Silva Meza.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas expuso una síntesis del considerando sexto “Inoperancia de los argumentos que plantean la invalidez formal de la Ley de Ingresos de la Federación para el

Ejercicio Fiscal de dos mil ocho (páginas de la cincuenta y cuatro a la cincuenta y seis), en cuanto se determina que es infundado el agravio en el que el recurrente plantea que no debió declararse inoperante su decimoquinto concepto de violación, ya que la inconstitucionalidad de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil ocho no se hizo depender de su contradicción con la Ley de Ingresos de dos mil siete, sino de la contravención a los artículos 14 y 16 constitucionales, debido a que el legislador incumplió con la formalidad esencial prevista en el artículo 31 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete, consistente en que la iniciativa debía acompañarse de la memoria de cálculo y las proyecciones de los ingresos a cinco años.

El proyecto propone que el agravio es infundado, pues aunque el argumento de la demanda no se haya planteado como una contradicción entre normas secundarias sino como una violación al principio de legalidad contenido en los artículos 14 y 16 constitucionales, lo cierto es que la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil siete no contiene normas que desarrollen el procedimiento legislativo previsto en la Constitución Federal, ni se trata de un ordenamiento que goce de jerarquía respecto de la ley de dos mil ocho, por lo que no puede condicionar su validez ni producir su inconstitucionalidad a la luz del principio de legalidad

*Sesión Pública Núm. 14*

*Martes 1 de febrero de 2011*

La señora Ministra Luna Ramos estimó que lo planteado es diverso a la respuesta que se da sobre el particular, considerando que el respectivo concepto de invalidez es fundado, no inoperante, pues el planteamiento no se da respecto de la violación a la Ley de Ingresos sino a los artículos 14 y 16 constitucionales, como si se impugnara un proceso legislativo, lo que sería tanto como señalar que no se cumple con las disposiciones de la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados porque la iniciativa no cumplió con determinadas formalidades, lo que no es materia de proporcionalidad, por lo que propuso que se modificara el argumento de contestación.

Los señores Ministros Aguilar Morales y Sánchez Cordero de García Villegas se manifestaron a favor de dicha propuesta.

Sometida a votación la propuesta modificada del proyecto contenida en el considerando sexto, se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Ortiz Mayagoitia y Presidente Silva Meza.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas señaló que respecto del tema abordado en el considerando séptimo “Proporcionalidad tributaria de los

artículos 1° y 3° de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo” ya se fijó criterio al resolver el anterior amparo en revisión, por lo que el señor Ministro Presidente Silva Meza sometió a consideración de los señores Ministros ratificar la votación respectiva, lo que en votación económica se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Ortiz Mayagoitia y Presidente Silva Meza.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas expuso una síntesis del considerando octavo “Legalidad de los artículos 1° y 12, fracción II, de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo” (páginas de la ochenta y siete a la noventa), en cuanto se propone declarar infundado el agravio en el que la parte recurrente aduce que la Juez de Distrito no estudió correctamente el segundo concepto de violación en el que se planteó que el objeto de la ley no se encuentra debidamente definido, al no precisar sobre qué ingresos, utilidades o incremento en el patrimonio de la cuenta recae el tributo.

Por otro lado, señala que no puede afirmarse de manera alguna que el artículo 1° de la ley impugnada contenga una definición de “depósito en efectivo”, pues la misma se integraría con elementos negativos, partiendo de aquellos actos que no tienen tal carácter, lo cual no puede

considerarse válido, puesto que un elemento esencial del tributo no puede definirse a partir de conceptos que lo excluyen, sino que deben consignarse de manera expresa en la ley sus caracteres esenciales.

Aunado a lo anterior, si bien el artículo 12, fracción II, de la ley reclamada establece una supuesta definición de lo que debe entenderse por depósitos en efectivo, ésta no es del todo clara y precisa, pues de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito no se desprende disposición alguna que contemple la definición o concepto de depósito en efectivo. En cambio, respecto de los cheques de caja, que la ley que se combate reputa como depósitos en efectivo, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito los considera depósitos bancarios de títulos, de ahí que no se encuentre perfectamente bien definido uno de los elementos esenciales del tributo.

El señor Ministro Valls Hernández manifestó su conformidad con la conclusión a que llega el proyecto pero no con la precisión relativa a que el objeto del tributo lo constituyen “Los depósitos en efectivo en moneda nacional o extranjera que se realicen en cualquier tipo de cuenta en las instituciones del sistema financiero, comprendiéndose dentro de este concepto a las adquisiciones en efectivo de cheques de caja”, ya que atendiendo a lo sostenido por este Alto Tribunal respecto del objeto del tributo, puede señalarse que constituye la manifestación de la realidad económica

sometida a la imposición, a los ingresos, el consumo de bienes y la circulación de la riqueza; es decir, el objeto, responde a la pregunta de qué grava el impuesto; de tal manera que si lo que grava son los ingresos percibidos en efectivo vía depósito bancario no declarados para efectos del impuesto sobre la renta, esto es lo que constituye la realidad económica sujeta a la imposición tributaria; recordando que en dicha definición se incluye el elemento de que dichos ingresos no hayan sido enterados por el impuesto sobre la renta, ya que de un análisis a los artículos 7 y 8 de la ley impugnada se desprende que si se paga dicho impuesto se puede recuperar el impuesto vía acreditamiento, compensación y devolución, pues al igual que en impuesto sobre la renta, el objeto de la constitución del impuesto sobre depósitos en efectivo por ser complementaria del impuesto sobre la renta, son los ingresos, precisando que en el impuesto a los depósitos en efectivo son los ingresos percibidos en efectivo.

El señor Ministro Aguilar Morales señaló que el objeto del tributo no son los ingresos no declarados para efectos del impuesto sobre la renta, ya que esta situación es paralela pues no sólo se puede decir que ni siquiera ha sido la oportunidad de declararlo, porque estos son los depósitos que se realizan mes con mes, por lo que consideró que el depósito respectivo no tiene esa cualidad.

La señora Ministra Luna Ramos dio lectura a lo señalado en el artículo 1º de la Ley del Impuesto a los Depósitos en efectivo, considerando que lo que se regula posteriormente no modifica el objeto del impuesto a los depósitos en efectivo, pues únicamente recae sobre dichos depósitos.

El señor Ministro Presidente Silva Meza agregó que es precisamente la caracterización de este impuesto de control una manifestación aislada de riqueza fuera de un entorno económico y fuera de un concepto o vinculado con el ingreso en sí mismo.

Sometida a votación la propuesta contenida en el considerando séptimo del proyecto, se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, con salvedades; Zaldívar Lelo de Larrea, Aguilar Morales, Valls Hernández, con salvedades; Sánchez Cordero de García Villegas, Ortiz Mayagoitia y Presidente Silva Meza.

El señor Ministro Franco González Salas precisó que formulará voto concurrente al estimar que la aseveración tajante relativa a que se genera una manifestación aislada de riqueza no es exacta, estimando que es una manifestación de riqueza que se manifiesta a través del

depósito de ciertas cosas, vinculada con el resto del sistema impositivo, particularmente con el impuesto sobre la renta.

El señor Ministro Valls Hernández manifestó que realizará un voto concurrente en relación con las consideraciones aprobadas respecto de este considerando.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas propuso suprimir la palabra “aislada” para señalar que es únicamente una manifestación de riqueza, lo que se aprobó por unanimidad de votos.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas expuso una síntesis del considerando noveno “Equidad del artículo 2, fracción II, de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo” (páginas de la noventa a la ciento uno), en cuanto se propone que es infundado el cuarto agravio en el que se afirma que la a quo no apreció adecuadamente los argumentos propuestos, ya que declaró inoperante e infundado el tercer concepto de violación por considerar que la inconstitucionalidad de una norma no puede analizarse a la luz de la exposición de motivos que le da origen y porque considera que la exención a las personas morales con fines no lucrativos está plenamente justificada, lo que resulta incongruente con los argumentos planteados en la demanda y resulta contradictorio en sí mismo.



El recurrente argumenta que si bien uno de los conceptos de violación consistió en que no existía una debida motivación de la norma para exentar del pago a las personas morales con fines no lucrativos, lo cierto es que en contra de dicha disposición también se introdujeron argumentos relacionados con la violación a los principios de legalidad y equidad tributarias, no sólo con motivo de lo dicho en la exposición de motivos sino propiamente por el sentido y alcance del precepto impugnado, no obstante lo cual la Juez de distrito no realizó análisis alguno respecto de la violación al principio de equidad que se invocó en el escrito inicial.

Por otro lado, se afirma que los fines extrafiscales no pueden justificar el trato distinto entre un contribuyente y otro en igualdad de circunstancias, por lo que es irrelevante que las personas morales con fines no lucrativos cuenten con propósitos de sentido social y bien común, pues lo cierto es que esas empresas también se encuentran obligadas a retener, calcular y enterar impuestos federales, por lo que independientemente de que no sean contribuyentes del impuesto sobre la renta, son susceptibles de ser sujetos del impuesto a los depósitos en efectivo que es una herramienta de control y podrían también utilizar el mecanismo de recuperación del impuesto.

Sometida a votación la propuesta del proyecto contenida en el considerando octavo, en votación

*Sesión Pública Núm. 14*

*Martes 1 de febrero de 2011*

económica, se aprobó por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Ortiz Mayagoitia y Presidente Silva Meza.

El señor Ministro Cossío Díaz precisó las observaciones a que se refirió en relación al punto segundo.

Los puntos resolutivos se aprobaron en votación económica, por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Aguilar Morales, Valls Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Ortiz Mayagoitia y Presidente Silva Meza en los siguientes términos: “PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida; SEGUNDO. Queda firme el sobreseimiento decretado en el punto resolutivo primero que se rige por el segundo considerando de la sentencia recurrida, en términos del considerando tercero de este fallo; TERCERO. Se confirma el sobreseimiento decretado en el punto resolutivo primero que se rige por el considerando cuarto de la sentencia recurrida, en términos del considerando quinto de esta ejecutoria; y CUARTO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a \*\*\*\*\*, en términos de esta resolución”.

*Sesión Pública Núm. 14*

*Martes 1 de febrero de 2011*

El señor Ministro Cossío Díaz manifestó reservas respecto del punto que se votó, señalando que al suprimir la expresión “manifestación aislada de riqueza” el impuesto perdió su carácter de impuesto indirecto, recordando que no se refiere al fenómeno económico sino al fenómeno tributario.

El señor Ministro Ortiz Mayagoitia consideró que el hecho de suprimir la palabra “aislada” no implica que deje de serlo ni tampoco implica un cambio de naturaleza, pues aislado es todo aquello único y desconectado de lo demás, recordando que en algunos casos se refiere a actos aislados, por lo que el suprimir la expresión no debía producir el alcance señalado por el señor Ministro Cossío Díaz pues puede tratarse de un hecho aislado el relativo a aquél por el que una persona por primera y única vez hace un depósito que es sujeto del gravamen, así como también podría tratarse de hechos recurrentes respecto de quienes los hacen de manera cotidiana y finalmente quedan sujetos al impuesto, es decir, cuando se hace referencia a una manifestación de la riqueza sin calificar si es aislada o no lo es, no significa expresamente que no pueda serlo, ante lo cual el señor Ministro Cossío Díaz manifestó que al haberse votado el asunto, únicamente reservaría su derecho para formular voto concurrente.

El señor Ministro Presidente Silva Meza declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

Sesión Pública Núm. 14

Martes 1 de febrero de 2011

A las trece horas con cinco minutos el señor Ministro Presidente Silva Meza decretó un receso y la sesión se reanudó a las trece horas con treinta minutos.

El secretario general de acuerdos dio cuenta con el siguiente asunto:

**II. 3. 282/2009**      Amparo en Revisión 282/2009 promovido por \*\*\*\*\*, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades, consistentes en la expedición y aplicación de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de octubre de dos mil siete. En el proyecto formulado por la señora Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas se propuso: *“PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión No Ampara ni Protege a \*\*\*\*\*, en contra de los actos y por las autoridades enunciadas en el resultando primero del presente fallo”.*

Asimismo, informó que en cuanto a los temas de fondo que se abordan, el considerando quinto contiene el tema votado relativo al principio de proporcionalidad tributaria, en tanto que en los considerandos séptimo y octavo se presentan temas novedosos.

El señor Ministro Presidente Silva Meza solicitó a la señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García

*Sesión Pública Núm. 14*

*Martes 1 de febrero de 2011*

Villegas hiciera la presentación del asunto para levantar la sesión y dar inicio a la sesión privada.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas precisó que en el presente asunto se señalan como actos reclamados del Congreso de la Unión, del Presidente de la República, del Secretario de Gobernación, del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Director del Diario Oficial de la Federación, del Jefe de Servicio de Administración Tributaria, de los Administradores Locales de Recaudación y de Auditoría Fiscal y de Jurídico, estos tres últimos de Mérida, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, el Decreto por el que se expide la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, publicado el primero de octubre del dos mil siete, incluyendo la propia ley, y en particular sus artículos 1º, 2º, fracción III, párrafos primero y segundo, y fracción VI; 3, 4, 7, 8 y 9. Agregó que la Juez de Distrito del conocimiento dictó sentencia en la que sobreseyó y negó el amparo, por lo que se interpuso el amparo en revisión.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió a votación los considerandos primero, competencia; segundo, oportunidad; y, tercero, cuestiones que deben quedar firmes; los cuales, en votación económica se aprobaron por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, Zaldívar Lelo de Larrea, Aguilar Morales, Valls

*Sesión Pública Núm. 14*

*Martes 1 de febrero de 2011*

Hernández, Sánchez Cordero de García Villegas, Ortiz Mayagoitia y Presidente Silva Meza.

La señora Ministra ponente Sánchez Cordero de García Villegas recordó que tal como señaló el secretario general de acuerdos, se presentarían los temas novedosos en el presente asunto.

El señor Ministro Presidente Silva Meza declaró que el asunto y los demás continuarán en lista, convocó a los señores Ministros para la sesión pública ordinaria que tendría verificativo el jueves tres de febrero del año en curso a las once horas y concluyó la sesión a las trece horas con treinta y cinco minutos.

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Juan N. Silva Meza y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, que da fe.